

El dilema de los gobernadores¹

Marcelo Capello

mcapello@ieral.org

Por estos días los gobernadores juntan moneda por moneda para pagar sueldos y medio aguinaldo, luego que sus finanzas se complicaran a la par de la desaceleración económica y la ralentización en el ritmo en que obtienen recursos. Es que se pasó de una suba en las transferencias nacionales a provincias (automáticas y discrecionales) del orden del 28% en el período enero – mayo 2011, a una del 22% en los primeros cinco meses de 2012, mientras los movimientos en las erogaciones cuentan con mayor inercia, especialmente por las negociaciones salariales que se realizan en base a la inflación pasada.

El conjunto de provincias, que había terminado con un déficit financiero de \$14.000 millones en 2011, finalizaría 2012 con un desequilibrio en torno a los \$23 mil millones. Sumadas las amortizaciones de deudas, el faltante a financiar este año ascendería a alrededor de \$32.000 millones. Con poco acceso a los mercados de deuda, especialmente luego del evento YPF, algunas jurisdicciones provinciales han respondido aumentando la presión tributaria (algunas ya lo habían hecho en años anteriores) y/o retardando sus pagos a proveedores y contratistas, en ambos casos agravando la situación en materia de actividad económica.

Además de jurisdicciones como Santa Cruz y Entre Ríos, entre las más complicadas se encuentran jurisdicciones grandes, como el caso de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y

¹ Nota publicada en el diario Perfil el 30 de junio de 2012



Mendoza. ¿Es un problema de irresponsabilidad fiscal en las provincias? En todo caso, no lo sería tanto como en el poder central: mientras las erogaciones primarias en el conjunto de provincias aumentaron un 29,1% anual promedio (nominal) entre 2003 y 2011, lo hicieron un 30,4% a nivel nacional. En materia de ingresos, las tasas anuales de variación fueron 27,4% y 28,1%, respectivamente.

Resulta llamativo que la mayoría de las provincias “grandes” se encuentren con problemas fiscales. ¿Qué explica dicha situación? En el caso de la provincia de Buenos Aires, resulta claro que el Fondo de Conurbano, que se creó para que Duhalde sea gobernador en 1991, desde hace varios años pasó a ser un lastre para dicha jurisdicción. Por su existencia, en 2011 dejaron de entrar \$2.400 millones en transferencias automáticas a las arcas de la provincia ahora gobernada por Scioli, que así pasó a depender del envío de recursos que se deciden discrecionalmente en el poder central, con las consecuencias en términos de alineamiento político que ello trae aparejado.

En el caso de Córdoba y Santa Fe, la mayor complicación proviene del hecho que ANSES no cumple con los envíos que debiera realizarles para financiar el déficit en sus sistemas de pensiones. Por caso, la provincia de Córdoba aportó alrededor de 3.500 millones de pesos a ANSES en 2011 por las detracciones a la coparticipación que se realizan con ese fin desde inicios de los 90s, pero no recibió de vuelta los \$1.040 millones que según convenio suscripto debían ingresar a la Caja de Jubilaciones local en ese año. Algo similar ocurre con Santa Fe.

En la última década se produjo un cambio sustancial en la relación Nación – Provincias: se redujo la importancia de los envíos automáticos a los gobiernos intermedios, y aumentó la importancia de los decididos discrecionalmente por el poder central. Este esquema permitió alinear intereses con los gobernadores. A éstos el esquema les cierra mientras existan posibilidades de obtener ayudas nacionales por montos superiores a los que podrían obtener por vías alternativas. Como en los últimos meses disminuyó la capacidad fiscal del gobierno central para realizar envíos a las provincias (aunque se abrió potencialmente el grifo del BCRA), los gobernadores, acuciados por la estrechez fiscal, deben estar ahora realizando un análisis beneficio costo respecto a si les conviene seguir esperando la ayuda nacional (que podría inclusive mezclarse con la interna política), o



recurrir a otras fuentes de financiamiento, más probablemente la emisión de cuasimonedas.

La reaparición de las cuasimonedas les causaría inicialmente costos políticos, pero también les otorgaría cierta autonomía financiera, al menos por algunos meses, que podría resultar importante para los anotados en la carrera presidencial. En estos casos, generalmente el límite es el pago de salarios: si hubiese problemas graves para cumplir con las remuneraciones en algunas provincias, habría que prepararse para ver circular nuevamente cuasimonedas. Para el gobierno nacional sería un problema económico y político importante si, por ejemplo, las provincias más grandes de la región pampeana recurren a dicho recurso extraordinario.

Para los gobernadores debe resultar tentador observar los datos monetarios de la crisis de los primeros años de la década del 2000, cuando la emisión de cuasimonedas llegó a resultar equivalente a cerca de un cuarto de la base monetaria. Transportado a la actualidad, significarían cifras de, por ejemplo, algo más de \$20 mil millones en Buenos Aires, o de \$5 mil millones en Córdoba. Claro que habría marcadas diferencias en el contexto: en 2001 no existía la posibilidad de emitir moneda legal sin respaldo, la economía se encontraba en recesión y con deflación, mientras que actualmente la inflación supera el 20% anual, y la economía se encuentra con mayor relación base monetaria a PIB: 11,4% en 2011, versus 9,3% en 2002. Emitir cuasimonedas sería ahora más inflacionario que en 2001, aunque esa alternativa muy probablemente esté siendo evaluada como una posibilidad de última instancia, o plan B, por parte de varios gobiernos provinciales.

Crecimiento anual promedio de Ingresos y Gasto Primario 2003-2011

